REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
IBAGUÉ - TOLIMA

Ibagué, dos (dos) de septiembre de dos mil veinte (2020).

**ACCIÓN DE TUTELA N° 001 2020 00173 DE MARÍA EUGENIA BARBOSA
ORTÍZ CONTRA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VICTIMAS Y OTROS**

Procede el despacho a desatar la solicitud de amparo constitucional dentro del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

Con el fin de obtener la protección del derecho fundamental de petición, la señora MARIA EUGENIA BURBANO ORTIZ, interpone acción de tutela contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS con el propósito de que se ordene dar respuesta clara, concreta y de fondo a petición del 15 de abril del año en curso.

Como sustento de sus pretensiones expuso que en su calidad de desplazada y debidamente registrada en el RUV, el 15 de abril de los cursantes, elevó derecho de petición a la accionada solicitando el pago de indemnización a que tiene derecho, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela haya recibido respuesta alguna

Admitida la presente acción mediante auto del 24 de agosto de 2020, se ordenó librar comunicación a las accionadas DIRECCIÓN UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS UARIV; UNIDAD DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA UAO; SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL DE LA DIRECCIÓN DE REPARACIÓN REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS; DIRECTOR DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS; DIRECTOR DE REPARACIONES; DIRECTOR DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, se puso en conocimiento el amparo pretendido por la accionante y se les solicitó la información pertinente.

Corrido el traslado de rigor, el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR señaló que si bien es cierto al plenario se adjuntó copia de la petición, también es cierto que la misma no centra con un radicado que permita demostrar que aquella lo fue en ese Instituto; Que consultado sus sistema de información misional SIM, se pudo constatar que no existe petición alguna del accionante a la entidad y que la entidad encargada de administrar los recursos para las victimas como indemnización por vía administrativa, es la Unidad para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas; por lo que al carecer de competencia para lo que pretende la accionante, se le debe desvincular de esta acción.

Por su parte, la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS manifestó que la señora MARIA EUGENIA BURBANO ORTIZ efectivamente se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas, que esta solicitó a la Unidad el pago de la indemnización administrativa y la atención humanitaria; que con radicación 202072012586201 del 14 de junio de 2020 emitió respuesta al derecho de petición y remitida a la dirección indicada en ella; igualmente dio respuesta a través del radicado 202072020440211 del 26 de agosto del mismo año.

De la misma manera y en cuanto al caso en concreto, expuso que al no encontrarse la señora MARIA EUGENIA BURBANO ORTIZ bajo situación de vulnerabilidad extrema, para acceder a la indemnización administrativa por el desplazamiento forzado, ha ingresado al procedimiento por Ruta General, teniendo en cuenta que formalizó la solicitud de reconocimiento de la indemnización el 18 de junio de 2020, por lo que luego de la entrega de documentación, la Unidad dispone de un término de 120 días hábiles para brindarles una respuesta de fondo que le indicará si tiene o no derecho a la indemnización administrativa, por lo que se encuentran dentro del término y que al haberse dado respuesta a la petición, se da un hecho superado.

Al respecto, PROSPERIDAD SOCIAL arguye que esta no ha incurrido en una actuación u omisión que generara amenaza o vulneración a derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que el derecho de petición objeto de este debate, fue dirigido y radicado ante la Unidad para la Atención a las Víctimas y no a esa entidad, sin embargo al consultarse en el sistema de correspondencia de la entidad DELTA y no se halló registro alguno de solicitudes; además, que carece de competencia para resolver la solicitud de indemnización administrativa pretendida por la señora BURBANO ORTIZ.

Las demás accionadas, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

La acción de tutela consagrada en la Constitución Nacional de 1991 se constituye en uno de los mecanismos destinados a buscar la materialización de los principios que componen el Estado Social de Derecho, siendo el instrumento idóneo para que toda persona logre la garantía y protección de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados o sean amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinados casos.

La finalidad de este procedimiento especial es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado, o impida, que la amenaza que sobre él se cierne se configure, teniendo la acción un

carácter eminentemente residual o supletorio, salvo en aquellos eventos donde se invoque como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

DEL DERECHO DE PETICIÓN

En el asunto que nos compete, la accionante adujo la vulneración del derecho fundamental de petición, por lo cual la Sala comienza por recordar que se encuentra definido por el artículo 23 de la Constitución Política, de la siguiente manera:

“Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Se trata entonces de un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud. Lo anterior significa que por ser un derecho fundamental debe tornarse efectivo, pues de nada valdría tener la posibilidad de elevar una solicitud, si no se le apareja el derecho de exigir una respuesta concreta y oportuna.

Así lo ha establecido la Corporación Constitucional en sentencia T-667 de 2011, al consagrar cuatro elementos que caracterizan dicho derecho, los cuales son:

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.”

En virtud de lo anterior, y siguiendo lo dispuesto en sentencia T-561 de 2007, el derecho fundamental de petición implica que la respuesta dada a la solicitud, además de efectuarse dentro del término legal y comunicarse al peticionario, sea suficiente, clara y congruente, sin que ello signifique que la contestación debe ser favorable a las peticiones formuladas.

En el caso que ocupa la atención del despacho, el 15 de abril de 2020 la accionante presentó derecho de petición ante la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el que solicitó la indemnización administrativa

y su desembolso, por considerar tener derecho a ello, sin que a la fecha de la presentación de la demanda haya recibido respuesta alguna.

Al respecto advierte este despacho, que la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al descorrer traslado de esta acción, allegó certificaciones de envío expedidas por la empresa de correos y copia de las comunicaciones dando respuesta a la accionante respecto de los términos para indicarle si tiene o no derecho a la entrega de lo pretendido, así como de los procesos para ello, y en consecuencia expedir o no, las ordenes de otorgamiento o pago de la indemnización reclamada, razón por la que a juicio del despacho, se atendió la solicitud de manera completa, clara y de fondo, máxime cuando ésta se remitió a la accionante por la empresa 4-72 a la dirección que para efectos de notificación dispuso la accionante, además, a través de comunicación telefónica, el despacho estableció contacto con la accionante quien confirmó lo enunciado por la accionada, es decir, haber recibido respuestas a su petición.

Por lo tanto, avizora el despacho, se presenta entonces un *hecho superado*, esto significa que los actos que amenazan o vulneran los derechos fundamentales cuya protección se pretende mediante el ejercicio de la acción de tutela desaparecieron y ya no existe vulneración de ningún derecho fundamental.

3. DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO IBAGUÉ-TOLIMA, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR la carencia actual de Objeto en lo relacionado con el Derecho Fundamental de Petición invocado por el señor MARIA EUGENIA BARBOSA ORTIZ, por lo que no es procedente tutelar lo pretendido en este amparo constitucional, por las razones y en los términos de esta Providencia.

SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados por el medio más expedito posible, y explicarles que cuentan con tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia para impugnarla.

TERCERO.- ENVIAR el presente expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser impugnado por parte alguna.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez,

Firmado Por:

**DANIEL CAMILO HERNANDEZ CAMARGO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO IBAGUE**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

13bcf330eb5429f28f25d4fee6dbc3a0070c382eb5b690d3de0bdcf1ea972ca3

Documento generado en 02/09/2020 08:01:36 a.m.